

Migración infantil irregular salvadoreña: reflexiones desde la psicología social

Mauricio Gaborit*
 Carlos Iván Orellana**
 Rafael Orellana Sibrián***

Palabras clave:

niñez migrante, psicología del desarrollo, migración irregular, estrés acumulativo, derechos humanos

Resumen

El presente ensayo persigue remarcar un conjunto de reflexiones teóricas, empíricas y epistemológicas a propósito de la migración infantil irregular salvadoreña. La primera parte aborda el tema de la niñez y la migración indocumentada ubicándola dentro del contexto de la realidad demográfica salvadoreña para luego describir y dimensionar el fenómeno migratorio a partir del flujo de deportaciones. La segunda sección del trabajo es la principal y ofrece tres esferas analíticas de la migración irregular de niños y niñas desde la perspectiva de la psicología social: a) La necesidad de historizar el constructo y la realidad de la niñez, especialmente en el marco del fenómeno migratorio como horizonte social de muchos niños y niñas centroamericanas; b) el dinamismo inherente al fenómeno migratorio que se cristaliza en inesperadas relaciones y gestiones del riesgo y la protección, así como la manifestación de una experiencia migratoria –construcción de la ruta migratoria y dinámicas de expulsión– con rasgos emergentes y cambiantes; c) un conjunto de procesos y manifestaciones psicosociales implicadas en la experiencia migratoria y temas centrales para el desarrollo de la niñez, como la reunificación familiar, el estrés aculturativo y la resiliencia. Al final del texto, se presentan algunas conclusiones a modo de epílogo. Se trata de reflexiones teóricas impostergables con implicaciones para la investigación que se desprenden del escrutinio de la migración infantil irregular como objeto de estudio.

* Doctor en Psicología Social. Jefe del Departamento de Psicología y Salud Pública y Director de la Maestría en Psicología Comunitaria. Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).

** Doctor en Ciencias Sociales. Docente del Departamento de Psicología y Salud Pública (UCA).

*** Estudiante de quinto año de la Licenciatura en Psicología (UCA).

1. Contexto de discusión y magnitud del fenómeno de la migración infantil irregular

Casi sin excepción, cuando se presenta un escrito o un informe que tenga que ver con la población de El Salvador, se concluye que se trata –todavía– de un país joven. De hecho así es: según el VI Censo de Población y V de Vivienda, de 2007, de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), Ministerio de Economía de El Salvador, un tercio de la población nacional (33.9 %) no sobrepasa los 15 años de edad. A su vez, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF] en 2011 ratificó que 40 % de la población del país lo constituían niños, niñas y adolescentes (Segura, 2012). Pero la fotografía actual cambiará y se espera que en las próximas décadas se vea modificada en el marco de la llamada *transición demográfica*. Este fenómeno, común a los países centroamericanos aunque no uniforme en sus ritmos y sus manifestaciones, consiste en la expectativa de crecimiento acelerado de la población en edad productiva que superará la magnitud histórica de aquellos segmentos poblacionales inactivos o dependientes (Programa del Estado de la Nación [PEN], 2011). Empero, este escenario favorable para la inversión, el crecimiento económico y el empleo, pone sobre la mesa más incertidumbres que certezas para ese deseado y amplio contingente social en “edad productiva”.

Según el PEN (2011), la transición demográfica constituye una oportunidad histórica que desafía a los países centroamericanos por diversos motivos: su nivel de avance o rezago en términos de desarrollo humano, debido a que su aprovechamiento pleno requiere contar con factores como la ampliación y la mejora de la cobertura educativa y sanitaria; se requiere garantizar la seguridad alimentaria, así como elevar la inversión pública o ampliar la capacidad productiva de la mano de obra calificada. Sin embargo, en la actualidad, los países centroamericanos igualmente experimentan otros fenómenos paralelos a

la transición demográfica que aumentan aún más el esfuerzo titánico que se requiere para aprovechar las bondades sociales y económicas que puede ofrecer la mencionada transición. De cara a la discusión de fondo que nos ocupa, la migración infantil irregular salvadoreña, cabe hacer mención específica de tres de estas circunstancias paralelas que estarían explicando y condicionando la transición demográfica:

1) *El aumento de la expectativa de vida de la población y la disminución de los índices de natalidad*: si en el quinquenio de 1950 y 1955 el promedio de la esperanza de vida de los y las salvadoreñas era de 45.1 años, medio siglo después, entre 2005 y 2010, esta tendencia ha aumentado hasta alcanzar los 71.1 años de media de vida (Córdova, Burgos, Tablas y Rodríguez, 2010), siendo llamativo en este escenario que los hombres alcancen a vivir hasta 66.5 años, mientras que las mujeres superen por mucho el promedio aludido con 75.9 años. Por otro lado, según la *Encuesta nacional de salud familiar* (FESAL), de la Asociación Demográfica Salvadoreña (ADS, 2009), la tasa global de fecundidad en mujeres con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años disminuyó en un 60 % entre los quinquenios de 1973-78 y 2003-2008, pasando de un promedio de 6.3 hijos por mujer a uno de 2.5 hijos por mujer. En otras palabras, en El Salvador, replicando una tendencia común al resto de Latinoamérica, mientras declina la población menor de quince años y crece la población en edad productiva (15-59 años) –el llamado “bono demográfico”–, se experimentará un aumento gradual de la población adulta mayor: si en 1950 se estimaba que un 6.1 % de la población contaba con 60 años o más, para 2005 esta proporción ya era de 9.2 %, y se espera que para el 2050 la misma aglutine al 19.3 % de la población nacional (Córdova *et al.*, 2010).

2) *La mortalidad asociada a la violencia que afecta principalmente a los jóvenes*: que la niñez salvadoreña ha estado y está bajo asedio y en peligro, no es ninguna novedad. Basta ir

al cantón el Mozote, en el departamento de Morazán, para encontrar esa placa conmemorativa, entre otros testimonios históricos, de la magnitud de la saña con que este país trata a sus niños y a sus niñas. En esa placa aludida se nos cuenta que, en 1992, fueron encontrados en un sitio del mencionado cantón, 146 personas asesinadas de las cuales 140 de ellas no alcanzaban los 12 años de edad; y solo en esa tristemente célebre masacre se calcula que algo más de 450 menores de edad fueron pasados por las armas. El fenómeno se multiplica si nos referimos a los niños desaparecidos durante el conflicto armado o a las niñas convertidas en instrumento y trofeo sexual de guerra. Se argumentará que remitirse al contexto de guerra es referirse a unas coordenadas analíticas donde la desproporción de la violencia explica con facilidad las muertes y los abusos cometidos en contra de los pequeños. Pero conviene recordar que, por una parte, la facilidad de la muerte que propicia un conflicto armado no sirve como justificación suficiente de los hechos que ahí se han producido y que nos ocupan; más importante aún, la guerra puede ser interpretada como un período de exacerbación de una realidad que desde siempre y de manera *sistemática* ha atentado contra la integridad y el bienestar de los niños y las niñas. En cualquier caso, en El Salvador, la violencia del presente basta y por sí misma da cuenta de mucho de su historia como país.

Si el punto anterior habla del progresivo decremento de los niños y los jóvenes debido a evoluciones demográficas, el presente factor contribuye con la misma tendencia a través de su eliminación física debido a la violencia. Además la violencia afecta de manera directa al recién mencionado bono demográfico. Dicho bono se refiere al importante contingente social en edad productiva que contribuye a quitar presión a la inversión social otrora requerida por sectores dependientes (educación básica, pensiones, salud, etc.). Pero ocurre que, en nuestro país, buena parte de ese segmento social en edad productiva, ese que ya se encuentra o que podría sumarse a

las filas de la fuerza laboral nacional, es precisamente el que casi sin excepción engrosa diariamente las estadísticas de muertes violentas, con lo que la violencia y el crimen se posicionan y confirman como factores de gran peso que atentan contra el desarrollo nacional y la integridad de la infancia y de la juventud.

Las cifras al respecto no dejan lugar para las dudas: en cuanto a la vinculación entre desarrollo y violencia, según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2009) enfocado en el problema de la inseguridad ciudadana, mostró que si, para 2006, la región centroamericana habría acusado un costo económico equivalente al 7.7 % de su PIB (\$6506 millones de dólares), El Salvador había sido el país con el mayor impacto económico al reportar pérdidas cercanas al 11 % de su PIB, debido al embate de la inseguridad. En términos generales, para 2008, el Estado salvadoreño estaría invirtiendo arriba de 15 de cada 100 dólares del gasto público (presupuesto nacional) en contrarrestar el crimen y la violencia. Por otro lado, la relación entre la amenaza especial que sufren los niños, las niñas y los jóvenes salvadoreños debido a la violencia y la criminalidad igualmente es alarmante. Por ejemplo, la representante del secretario general de Naciones Unidas para la violencia contra la niñez, Marta Santos Pais, durante una visita reciente al país denunció que, entre 2005 y 2011, habían sido asesinados más de 5000 niños y que se calculaba que cada tres horas una niña adolescente era víctima de abuso sexual (ACAN-EFE, 2013). Por otro lado, el porcentaje mayoritario de los homicidios que se cometen en el país se concentran entre individuos con edades comprendidas entre los 15 y los 34 años, es decir, desde menores de edad hasta adultos jóvenes; de hecho, la cantidad de muertes violentas en la franja de edad de 15 a 19 años ha experimentado un alza evidente en el quinquenio de 2005-2011, al pasar de 578 homicidios en el 2005, a 855 en 2011 (Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo [FUNDAUNGO], 2012).

3) *La migración hacia el exterior*: la migración de salvadoreños y salvadoreñas en un alto porcentaje se dirige hacia Estados Unidos, meta histórica principal de la migración salvadoreña. Según el PNUD (2010), en las últimas dos décadas habrían salido del país, prioritariamente hacia los Estados Unidos y en búsqueda de mejores oportunidades, arriba de 60 000 personas por año. Es fácil deducir que lo anterior conlleva ya la presencia de varias generaciones de salvadoreños que se han abierto camino fuera, que juegan un papel crucial en la economía salvadoreña con el envío de remesas, pero también que contribuyen a estimular transformaciones socioculturales y la salida de aún más compatriotas, generalmente la de los miembros más jóvenes de las familias que emprendieron el viaje con anterioridad (hijos e hijas, hermanos y hermanas, etc.). La pregunta que cae por su propio peso es ¿por qué tantos menores emprenden un viaje tan arriesgado?

Datos obtenidos de una investigación en la que participaron los autores¹ confirman que jóvenes salvadoreños potenciales migrantes se ven compelidos a abandonar el país debido a un motivo compuesto que, al menos, estaría constituido por tres elementos: la aspiración por un futuro mejor, la amenaza de la violencia y, de manera importante, por el afán de reunificación familiar, la búsqueda por reencontrarse con su familia que ya se encuentra en el país del norte; evidencia de otros países confirman igualmente estas tendencias (Domínguez y Polo, 2006). En la última encuesta de juventud desarrollada en El Salvador en 2007 (Santacruz y Carranza, 2009), se confirmó que al menos uno de cada cuatro jóvenes tenía intención de marcharse del país y, como confirmación del peso de las motivaciones implicadas, esto es especialmente cierto si el joven trabaja y tiene escolaridad (noveno grado y bachillerato). Es decir, se puede asumir que la constatación de la calidad de las condiciones materiales de existencia y

las perspectivas que ofrece el país –en este caso, el empleo y el estudio– están lejos de frenar los planes de abandonar el país. En términos generales, la migración para niños, niñas y jóvenes de ciertos sectores sociales, al constituir la generación migrante de relevo pero también por carecer de los medios materiales para migrar legalmente, presenta características avasallantes porque se suma a los imperativos normativos de la edad, porque se desarrollan bajo la presión familiar y socio-comunitaria de salir y porque cualquier posible plan vital soñado (estudio, familia, recreo) se verá subordinado a –y quizás truncado por– la enorme empresa que supone migrar (Gaborit, Zetino, Brioso y Portillo, 2012).

Tomando en cuenta lo antes expuesto –el aumento de la expectativa de vida y la disminución de la mortalidad, la violencia y la migración–, es claro que la transición demográfica descansa sobre la tensión de augurar una alta productividad y un alto protagonismo de los jóvenes mientras coexisten con este esperanzado augurio distintas tendencias que están contribuyendo a la disminución, la desaparición, la aniquilación y la expulsión de los miembros más jóvenes de la sociedad. Según el PEN (2011), embarcarse en la ventana de oportunidad que ofrece la transición demográfica exige esfuerzos nacionales profundos y sostenidos porque, en el largo plazo, si los jóvenes no llegan a contar con buenos niveles de salud y de educación, una alta productividad se vuelve una quimera. Un escenario carente de productividad y de inversión social igualmente disminuiría las probabilidades de contar con protección social, lo que conduce a considerar un panorama de incertidumbre personal y familiar. Por otro lado, si la obtención de altos niveles de productividad no se cumple, se volvería imposible sostener a los futuros jubilados o dependientes, dado que gradualmente la población en edad de trabajar irá disminuyendo. Asimismo, este juego de exigentes precondiciones necesarias y de esce-

1. Datos preliminares de la investigación: *Atrapados en la tela de araña: la migración irregular de niñas y niños salvadoreños hacia los Estados Unidos*. Informe presentado a la Fundación Ford, marzo 2014.

narios posibles son los que pueden terminar contribuyendo con el alza de los niveles de frustración social, de exclusión y, en última instancia, podrían ser los aspectos que terminen mostrando la puerta de salida del país y que la migración se haga presente como un necesario y legítimo recurso de supervivencia.

El desafío de la transición demográfica es colosal para los países centroamericanos porque supone resarcir deudas históricas de proyectos nacionales así como deficiencias de sus sistemas socioeconómicos. En lo que al caso salvadoreño se refiere, sentar las bases propicias para la transición demográfica supondría, al menos, contener el embate de una economía que ha probado no tener piedad al reducir las capacidades del Estado para hacer valer sus funciones y mandatos. Supondría revertir, por ejemplo, la presencia de maquila de baja transferencia tecnológica, de garantizar políticas públicas efectivas para la niñez y la juventud, así como la reducción drástica de su muerte por los altos niveles de violencia social a la que se encuentran expuestos estos grupos poblacionales. Pero sobre todo, de fondo, sería necesario disminuir la brecha histórica que en la actualidad mantiene unos niveles de desigualdad y exclusión tales que impiden el acceso a una condición real de ciudadanía y confirman un estado de precontractualidad histórica que, desde siempre, ha cerrado la posibilidad a un empleo digno a las grandes mayorías (Orellana, 2012). Esta situación de exclusión y privación de ciudadanía, que ya es bastante rigurosa si se considera la vulnerabilidad propia del empleo informal, se habría visto agravada desde la entrada de las políticas económicas neoliberales y debido a la actual crisis económica con sus masivos recortes de empleo, sus imposibles requerimientos de “flexibilización” y la consecuente exacerbación de la precariedad vital. La precariedad vital, que es al fin de cuentas precariedad ciudadana, y los lazos familiares que reclaman en el exterior a tantos niños, niñas y jóvenes connacionales, constituyen un atractivo y muy flexible trampolín con el que cada vez más se sueña con escapar y saltar las

fronteras del país. Ahora, ¿qué dimensiones alcanza la migración irregular de menores centroamericanos y salvadoreños?

La migración indocumentada de niños, niñas y adolescentes de Centroamérica hacia los Estados Unidos sigue siendo una problemática de gran envergadura. En consonancia con la migración de adultos, la migración de menores ha aumentado hasta tal punto que, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, el 5 % de todos los salvadoreños deportados en 2013 eran menores, en comparación con el año 2011, en que los menores repatriados representaron un 3.14 % de todas las deportaciones. El aumento dramático de niños, niñas y adolescentes migrantes irregulares provenientes de los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y el Salvador) comienza a evidenciarse a partir 2011. El Department of Homeland Security de los Estados Unidos estima que, para 2014, el número de menores de esos tres países que serán referidos al sistema de inmigración puede ascender a unos 60 000, lo que representaría un aumento de casi 160 % respecto del año 2013, y más de catorce veces el número de niños retenidos en el año 2011. Esa dependencia norteamericana reporta que los menores centroamericanos representan un 93 % de esos números (37 % de Guatemala, 26 % de El Salvador y 30 % de Honduras). Bajo todas luces, son números enormes que representan condiciones de inseguridad y peligro para muchos menores.

Las cifras anteriores se refieren a niños y niñas que, vadeando toda suerte de peligros, llegan a la frontera de los Estados Unidos y son detenidos. Pero no todos llegan hasta ahí. No pocos son aprehendidos durante su trayecto migratorio en México. De estos, los que oscilan entre los 12 y 17 años de edad todavía representan la mayoría, llegando a ser aproximadamente un 83.5 % de todos los menores detenidos en distintos lugares del territorio mexicano entre los años 2007 y 2012 (ver figura 1).